

No. 40352

**Mexico
and
Peru**

Agreement between the United Mexican States and the Republic of Peru on judicial assistance in criminal matters. Mexico City, 2 May 2000

Entry into force: *1 March 2001 by notification, in accordance with article 24*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 18 June 2004*

**Mexique
et
Pérou**

Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre les États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2 mai 2000

Entrée en vigueur : *1er mars 2001 par notification, conformément à l'article 24*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 18 juin 2004*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
REPUBLICA DEL PERU SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN
MATERIA PENAL**

Los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en adelante denominados "las Partes";

ANIMADOS por el deseo de intensificar su cooperación en el campo de la asistencia jurídica en materia penal;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

TOMANDO en consideración los lazos de amistad y cooperación que los unen;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de derecho internacional, en especial los de soberanía, integridad territorial y no Intervención;

CONSCIENTES de la importancia de fomentar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación de acciones tendientes a agilizar los mecanismos de asistencia jurídica tradicionales;

Han convenido lo siguiente:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1
OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA

1. Cada una de las Partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio la más amplia asistencia jurídica en el desarrollo de procedimientos penales.

2. La asistencia jurídica tendrá por objeto la prevención, investigación, persecución de delitos o cualquier otro procedimiento penal, incoado por hechos que estén dentro de la competencia o jurisdicción de la Parte Requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada, y en relación con procedimientos conexos de cualquier otra índole relativos a los hechos delictivos mencionados.

3. El presente Convenio no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender en la jurisdicción territorial de la Otra, el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra Parte, por su legislación nacional.

4. La asistencia jurídica comprenderá:

- a) práctica y remisión de las pruebas y diligencias solicitadas;
- b) remisión de documentos e información de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio;

- c) notificación de providencias, autos y sentencias;
- d) localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Convenio en calidad de testigos o peritos;
- e) ejecución de peritajes, decomisos, incautaciones, aseguramientos, inmovilización de bienes, embargos, así como la identificación o detección del producto de los bienes e instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares y registros domiciliarios o cateos;
- f) facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio de la Parte Requerida a funcionarios de la Parte Requiriente, en calidad de observadores, previa autorización de las autoridades competentes de la Parte Requerida, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Convenio, siempre que el ordenamiento interno de la Parte Requerida así lo permita, y
- g) cualquier otra asistencia que acuerden las Partes, de conformidad con el objeto y propósito del presente Convenio.

ARTICULO 2
HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA

1. La asistencia podrá prestarse aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requiriente no esté previsto como delito por la Parte Requerida.

2. Sin embargo, para la ejecución de cateos, registros domiciliarios, aseguramientos, decomisos, embargo de bienes e interceptación telefónica por mandato judicial y otras medidas coercitivas, la

asistencia sólo será prestada si el hecho por el que se procede en la Parte Requirente está previsto como delito también por la legislación de la Parte Requerida, o bien si resulta que la persona contra quien se procede, ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

**ARTICULO 3
DENEGACION DE LA ASISTENCIA**

1. La asistencia podrá ser denegada si:
 - a) las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la Parte Requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha Parte;
 - b) el hecho, en relación al que se procede, es considerado por la Parte Requerida como delito político o militar;
 - c) la Parte Requerida tiene razones fundadas para suponer que consideraciones relacionadas con la raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, opiniones políticas o condiciones personales o sociales de la persona imputada del delito, pueden influir negativamente en el desarrollo del proceso o en el resultado del mismo;
 - d) la persona contra quien se procede en la Parte Requirente ya ha sido juzgada por el mismo hecho que motivó la solicitud;
 - e) la Parte Requerida considera que la prestación de la asistencia puede ocasionar un perjuicio razonable a su soberanía, a su seguridad o a otros intereses esenciales nacionales, y
 - f) la solicitud no satisface los requisitos exigidos por este Convenio.

2. La asistencia podrá ser rechazada o diferida si la ejecución de las acciones solicitadas interfiere con algún procedimiento judicial que se siga en la Parte Requerida.

3. La Parte Requerida, antes de negar o posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, podrá considerar sujetarla a ciertas condiciones, las cuales serán establecidas por las Autoridades Centrales. En todos los casos, la denegación o diferimiento de asistencia deberá ser motivada.

ARTICULO 4 EJECUCION

1. Los requerimientos de asistencia con base en este Convenio, se efectuarán a través de las Autoridades Centrales competentes que son: por los Estados Unidos Mexicanos la Procuraduría General de la República y por la República del Perú el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

La Autoridad Central de la Parte Requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.

2. Para la ejecución de las acciones solicitadas se aplicarán las disposiciones de la legislación de la Parte Requerida.

3. La Parte Requerida informará a la Parte Requirente que así lo haya solicitado, la fecha y el lugar de la ejecución de las acciones requeridas.

TITULO II
FORMAS ESPECIFICAS DE ASISTENCIA

ARTICULO 5
NOTIFICACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida diligenciará cualquier citación, notificación o entrega de documentos relacionados con una solicitud de asistencia o que forma parte de ella, de conformidad con su ordenamiento jurídico.

2. La solicitud que tenga por efecto la notificación de actuaciones deberá estar debidamente fundamentada y enviada con anticipación razonable respecto a la fecha de la comparecencia prevista.

3. La Parte Requerida devolverá una constancia de haber efectuado la diligencia, de acuerdo a la solicitud de asistencia.

ARTICULO 6
ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACIONES Y OBJETOS

1. Cuando la solicitud de asistencia tenga por objeto el envío de avisos o documentos, la Parte Requerida tendrá la facultad de remitir copias certificadas, salvo que la Parte Requirente solicite expresamente los originales; en este caso, la Parte Requerida decidirá su viabilidad y lo comunicará a la Parte Requirente.

2. Los documentos, los avisos originales y los objetos enviados a la Parte Requirente serán devueltos a la brevedad posible a la Parte Requerida, a menos que esta última renuncie expresamente a este derecho.

3. La Parte Requerida podrá proporcionar registros o información, no accesibles al público, que estén en posesión de una entidad oficial, en la misma medida y condiciones en que los pondría a disposición de sus propias autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes.

4. Las pruebas o documentos transmitidos a través de las Autoridades Centrales de conformidad con el presente Convenio, deberán estar certificadas y legalizadas por las autoridades competentes.

ARTICULO 7

COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA

1. Si la prestación de la asistencia jurídica requiere la comparecencia de personas para prestar declaración o proporcionar información documental u objetos en el desarrollo de acciones del Ministerio Público y judiciales en el territorio de la Parte Requerida, dicha Parte podrá, si su legislación interna lo permite, exigir y aplicar los medios de apremio previstos por su propia legislación.

2. No obstante lo señalado en el numeral 1 del presente Artículo, cuando se trate de la comparecencia de los imputados, la Parte Requiriente deberá indicar en la solicitud, las medidas de apremio o de seguridad que serían aplicables según su legislación y la Parte Requerida no podrá sobrepasar tales medidas.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida informará con antelación la fecha y el lugar en el que se realizará la recepción del testimonio o de la prueba pericial.

4. Si la persona citada o notificada para comparecer, rendir informe o proporcionar documentos en la Parte Requerida, invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo la legislación de la Parte Requirente, su reclamo será dado a conocer a ésta a fin de que resuelva lo pertinente.

5. La Parte Requerida informará a la Parte Requirente de la fecha y lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia.

6. La Parte Requerida podrá autorizar, en condiciones de reciprocidad, la participación de autoridades de la Parte Requirente en las diligencias que deban realizarse en su territorio. Esta participación será admitida exclusivamente a título de observador de la autoridad competente de la Parte Requerida, de conformidad con la legislación aplicable de la misma.

ARTICULO 8
COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Toda persona citada o notificada a comparecer en calidad de tēstigo o perito en el territorio de la Parte Requirente, en cumplimiento de una solicitud de asistencia, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de la Parte Requirente.

2. La Parte Requirente sufragará los gastos del testigo o perito que cumpla con la citación, de acuerdo con lo previsto por su legislación. La Parte Requerida, a solicitud de la Parte Requirente, podrá proporcionar un anticipo. La persona requerida será informada de la clase y monto de los gastos que la Parte Requirente haya consentido en pagarle.

3. Si la solicitud tiene por objeto la citación a comparecer en la Parte Requerente, de un procesado, testigo o perito que no concurra, no podrá ser sometido por la Parte Requerida a sanciones o medidas coercitivas que sobrepasen a las previstas en la legislación de la Parte Requerente.

ARTICULO 9
TRASLADO DE PERSONAS BAJO CUSTODIA PARA PRESTAR
TESTIMONIO O PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACION

1. Una persona que se encuentre bajo custodia en la Parte Requerida y cuya presencia resulte necesaria como testigo o para propósitos de identificación en la Parte Requerente, será trasladada al Estado de dicha Parte si dicha persona consiente en ello, y si la Autoridad Central de la Parte Requerida no tiene bases razonables para denegar la solicitud.

2. Para los efectos de este Artículo:

- a) la Parte Requerente tendrá la facultad y obligación de mantener bajo custodia a la persona que haya sido trasladada a menos que la Parte Requerida autorice otra cosa;
- b) la Parte Requerente devolverá a la persona trasladada a la custodia de la Parte Requerida, tan pronto como las circunstancias lo permitan o según se acuerde entre las Autoridades Centrales correspondientes.

ARTICULO 10
GARANTIAS

1. En los casos en que la solicitud tenga por objeto la citación de una persona para comparecer en la Parte Requerente, la persona citada, si comparece, no podrá ser sometida a procedimientos coercitivos o restrictivos de la libertad personal, por hechos anteriores a la notificación de la citación.

2. La garantía prevista por el párrafo 1, cesará cuando la persona permaneciere más de quince (15) días en el territorio de la Parte Requirente, a partir del momento en que su presencia ya no fuera requerida expresamente por las autoridades competentes de dicha Parte.

3. La Parte Requirente a la que se traslade el testigo o pecto cuando, dicha persona haya aceptado cooperar con una solicitud de asistencia, velará por su seguridad personal.

ARTICULO 11
COOPERACION PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS

A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida proporcionará las facilidades necesarias para la ejecución y desahogo de pruebas y diligencias dentro de su territorio, en el marco del presente Convenio.

ARTICULO 12
ENVIO DE SENTENCIAS Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO JUDICIAL

1. La Parte Requerida, cuando envíe una sentencia penal, proporcionará también las Indicaciones relacionadas con el procedimiento respectivo que hayan sido eventualmente solicitadas por la Parte Requirente.

2. Los certificados del registro judicial que sean necesarios para el desarrollo de un procedimiento penal, serán enviados a dicha Parte a la brevedad posible.

**ARTICULO 13
PLAZOS**

En toda solicitud de asistencia en la que exista un plazo para efectuarla, la Parte Requirente deberá remitir la solicitud a la Parte Requerida por lo menos con treinta (30) días de antelación al termino establecido. En casos urgentes, la Parte Requerida podrá renunciar al plazo para la notificación.

**ARTICULO 14
OBTENCION DE PRUEBAS**

1. La Parte Requerida, de conformidad con su derecho interno y a solicitud de la Parte Requirente, podrá recibir declaración de personas dentro de un proceso que se siga en la Parte Requirente y solicitar la presentación de las pruebas necesarias.

2. Cualquier interrogatorio deberá ser presentado por escrito y la Parte Requerida, después de evaluarlo, decidirá sobre su procedencia.

3. Tanto los funcionarios de la Parte Requirente como las demás personas involucradas en el proceso podrán estar presentes en el interrogatorio que estará siempre sujeto a la legislación de la Parte Requerida.

**ARTICULO 15
LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS**

La Parte Requerida tomará las medidas necesarias con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas en una solicitud de asistencia y mantendrá informada a la Parte Requirente del avance y resultados de sus investigaciones.

ARTICULO 16
BUSQUEDA Y ASEGURAMIENTO DE OBJETOS

1. Toda solicitud de búsqueda, aseguramiento y/o entrega de cualquier objeto a la Parte Requirente será cumplida si incluye la información que justifique dicha acción bajo la legislación de la Parte Requerida.

2. Los funcionarios de la Parte Requerida que tengan la custodia de objetos asegurados certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad Central. No se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles en la Parte Requirente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos expuestos.

3. La Parte Requerida no estará obligada a entregar a la Parte Requirente ningún objeto asegurado, a menos que esta última convenga en cumplir las condiciones que la Parte Requerida señale a fin de proteger los intereses que puedan tener terceros en relación con el objeto a ser entregado.

ARTICULO 17
ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO Y OTROS

1. Si una de las Partes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo, ubicados en el territorio de la otra Parte, que pudiesen ser decomisados, incautados o de otro modo asegurados conforme a la legislación de esa Parte, deberá comunicar este hecho a la Autoridad Central de la otra Parte. Esa otra Parte, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su

decisión de acuerdo con la legislación de su país y, por mediación de su Autoridad Central, informarán a la otra Parte sobre la acción que se haya tomado.

2. Las Partes se prestarán asistencia jurídica en la medida que lo permita su respectiva legislación y el presente Convenio, en los procedimientos relacionados con el decomiso de los medios usados en la comisión de delitos y de los frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos y el pago de multas impuestas como condena en juicios penales.

3. La Parte Requerida y la Parte Requirente repartirán en la proporción y condiciones que acuerden, según el caso, los bienes objeto de decomiso o el producto de la venta de los mismos, siempre y cuando exista una colaboración efectiva entre las Partes.

ARTICULO 18
INFORMACION RELACIONADA CON LAS CONDENAS

Cada Parte informará anualmente a la Otra acerca de las sentencias de condena pronunciadas por sus propias autoridades judiciales, contra ciudadanos de dicha Parte.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS Y GASTOS

ARTICULO 19
DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. La asistencia se prestará a solicitud de la Parte Requirente.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito y deberá contener la información siguiente:

- a) cargo y nombre de la autoridad competente encargada de la investigación, del procedimiento o la diligencia a que se refiera la solicitud;
- b) motivo, naturaleza y asunto a que se refiera la investigación, el procedimiento o la diligencia;
- c) descripción de las pruebas o de la información requerida o de los actos de asistencia jurídica que se soliciten;
- d) descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación de la Parte Requirente. Deberá transcribirse o adjuntarse el texto de las disposiciones legales pertinentes;
- e) detalle y fundamento de cualquier aspecto o procedimiento particular que la Parte Requirente desea que se siga, y
- f) término dentro del cual la Parte Requirente desearía que la solicitud sea cumplida.

3. De acuerdo a la naturaleza de la asistencia jurídica solicitada en la medida de lo posible se incluirá:

- a) la información disponible sobre la identidad, datos y señas particulares que permitan la identificación de la persona a ser localizada, así como su domicilio;
- b) la identidad, datos y señas particulares que permitan la identificación de la persona que deba ser citada o notificada, la relación que dicha persona guarda con el proceso penal y la forma en que debe llevarse a cabo la notificación;
- c) la identidad, datos y señas particulares que permitan la identificación de las personas que sean solicitadas para la práctica de pruebas;
- d) la descripción del lugar del registro o cateo y de los objetos que deban ser asegurados;

- e) mención del tipo de bienes respecto de los cuales se solicita el aseguramiento, decomiso, incautación y/o embargo, y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
- f) cuando fuere el caso, una precisión del monto a que asciende la afectación de la medida cautelar;
- g) las formas y modalidades especiales eventualmente requeridas para la ejecución de las acciones, así como los datos identificatorios de las autoridades o particulares que puedan participar, y
- h) cualquier otra información que sea necesaria de acuerdo con la legislación de la Parte Requerida para permitir la ejecución de la solicitud.

Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, podrá solicitar Información adicional a la Parte Requirente.

ARTICULO 20 GASTOS

La Parte Requerida sufragará todos los gastos relacionados con el cumplimiento de una solicitud, con excepción del traslado de testigos y honorarios de peritos, los cuales serán sufragados por la Parte Requirente.

ARTICULO 21 CONFIDENCIALIDAD

Todo trámite o pruebas proporcionadas con base en el presente Convenio, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en Investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que la Parte Requirente y la Parte Requerida acuerden lo contrario.

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 22
CONSULTAS Y OTRAS MODALIDADES

Las Autoridades Centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente Convenio.

La asistencia y los trámites previstos en el presente Convenio no impedirán que cualquiera de las Partes asista a la Otra de conformidad con las disposiciones de otros acuerdos internacionales de los que sean Parte o de su legislación interna.

ARTICULO 23
INTERPRETACION

Cualquier controversia que pudiera surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada entre las Autoridades Centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre las Partes.

ARTICULO 24
RATIFICACION, MODIFICACION Y ENTRADA EN VIGENCIA

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida y entrará en vigencia treinta (30) días después de que las Partes hayan intercambiado notificaciones, por la vía diplomática, indicando que sus respectivos requisitos legales para la entrada en vigor han sido cumplidos.

2. El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1.

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio en cualquier momento, mediante notificación escrita, por la vía diplomática y dejará de estar en vigor seis (6) meses después de recibida tal notificación por la otra Parte.

4. La solicitud de asistencia jurídica formulada dentro de la vigencia del presente Convenio será atendida aún cuando éste haya sido denunciado.

Firmado en la Ciudad de México, el dos de mayo de dos mil, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**


**Rosario Green
Secretaria de Relaciones
Exteriores**

**POR LA
REPUBLICA DEL PERU**


**Fernando de Trazegnies
Ministre de Relaciones
Exteriores**

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE REPUBLIC OF PERU

The United Mexican States and the Republic of Peru, hereinafter "the Parties";

Prompted by the desire to intensify their cooperation in the field of judicial assistance in criminal matters;

Recognizing that the fight against crime is a shared responsibility of the international community;

Considering the ties of friendship and cooperation uniting them;

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States, as well as the principles of international law, especially sovereignty, territorial integrity and non-intervention;

Aware of the importance of taking joint action to prevent, monitor and punish crime in all its manifestations through the coordination of measures to streamline traditional mechanisms of judicial assistance;

Have agreed as follows:

Title I. General provisions

Article I. Obligations of assistance

1. Each of the Parties undertakes to provide to the other Party, in fulfilment of the provisions of this Agreement, the most extensive judicial assistance in the pursuit of criminal proceedings.

2. The purpose of such judicial assistance shall be the prevention, investigation and prosecution of offences or any other criminal proceedings arising from acts that are within the competence or jurisdiction of the requesting Party at the time the assistance is requested, and with respect to related proceedings of any other kind connected with the aforementioned criminal acts.

3. This Agreement does not empower the authorities of either Party to undertake within the territorial jurisdiction of the other Party the exercise and performance of the functions whose jurisdiction or authority are entrusted exclusively to the authorities of that other Party by its national laws.

4. Judicial assistance shall include:

(a) Conducting preliminary enquiries where requested and communicating the results;

(b) Transmittal of documents and information in accordance with the terms and conditions of this Agreement;

(c) Notification of procedural decisions, orders and final decisions of the court;

(d) Location and voluntary transfer of witnesses or experts for the purposes of this Agreement;

(e) Execution of expert appraisals, confiscations, attachments, impoundments, freezing of assets, and embargoes and identification or detection of the proceeds from and instruments used in the commission of a crime, visual inspections and searches or surveillance of homes;

(f) Facilitating entry into and granting freedom of movement within the territory of the requested Party to officials of the requesting Party, in the capacity of observers, subject to authorization by the competent authorities of the requested Party, for the purpose of assisting in the execution of the actions described in this Agreement, provided that the national laws of the requested Party so permit; and

(g) Any other form of assistance that the Parties may agree upon, in conformity with the object and purpose of this Agreement.

Article 2. Circumstances under which assistance may be requested

1. Assistance may be provided even if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party does not constitute an offence in the requested Party.

2. Nonetheless, for the execution of inspections, searches of homes, impoundments, confiscations, attachments of property, interception of telephone communications pursuant to a judicial order and other coercive measures, assistance may be provided only if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party is also considered an offence under the law of the requested Party, or if the defendant has freely given his written consent.

Article 3. Denial of assistance

1. Requests for assistance may be denied if:

(a) The actions requested are prohibited by the laws of the requested Party or are contrary to fundamental principles of the legal system of the said Party;

(b) The act in respect of which proceedings have been instituted is considered by the requested Party to be a political or military offence;

(c) The requested Party has well-founded reasons for concluding that considerations related to the race, religion, sex, nationality, language, political opinions or personal or social status of the person accused of the offence may have an adverse impact on the course or outcome of the proceeding;

(d) The person against whom proceedings have been instituted in the requesting Party has already been prosecuted for the same act as that in respect of which the request for assistance was made;

(e) The requested Party considers that provision of the assistance may have serious adverse consequences for its sovereignty, security or other vital national interests; and

(f) The request fails to fulfil the conditions required under this Agreement.

2. A request for assistance may be refused or deferred if the execution of the actions requested interferes with any judicial proceeding instituted in the requested Party.

3. The requested Party may, before denying or deferring action on a request for assistance, consider subjecting the request to certain conditions, which shall be determined by the Central Authorities. The grounds for denial or deferral of assistance shall in all cases be stated.

Article 4. Execution

1. Requests for assistance under this Agreement shall be made through the competent Central Authorities, which shall be: for the United Mexican States, the Office of the Attorney General of the Republic and, for the Republic of Peru, the Office of the Public Prosecutor and the judicial authorities. The Central Authority of the requested Party shall deal expeditiously with requests and, where appropriate, shall transmit them to other competent authorities for action.

2. The provisions of the legislation of the requested Party shall apply in the execution of the actions requested.

3. The requested Party shall inform the Party making the request of the date and place of the execution of the requested actions.

Title II. Specific forms of assistance

Article 5. Service and transmittal of documents

1. At the request of the requesting Party, the requested Party shall take action on any summons, service or transmittal of documents in connection with a request for assistance or which is part of such request, in accordance with its national laws.

2. A request for the service of proceedings shall be duly substantiated and shall be submitted within a reasonable period before the scheduled date of appearance.

3. The requested Party shall provide evidence of having executed the action, in accordance with the request for assistance.

Article 6. Transmittal of documents, information and objects

1. Where a request for assistance concerns the transmittal of notices or documents, the requested Party may provide certified copies, except where the requesting Party specifically requests original documents, in which case the requested Party shall determine whether it is possible to do so and shall inform the requesting Party accordingly.

2. Original documents and notices and objects transmitted to the requesting Party shall be returned as soon as possible to the requested Party, unless the requested Party expressly waives this right.

3. The requested Party may provide records or information in the possession of an official entity that are not open to public access, to the same extent and under the same conditions as it would make them available to its own law enforcement authorities.

4. Evidence or documents transmitted through the Central Authorities in accordance with this Agreement shall be certified and authenticated by the competent authorities.

Article 7. Appearance of persons in the requested Party

1. If the provision of judicial assistance requires the appearance of persons to give evidence or provide documentary information or objects in the course of actions by the Office of the Public Prosecutor and judicial authorities in the territory of the requested Party, such Party may, if its national laws so permit, apply and enforce the means of coercion provided for in its own legislation.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, with respect to the appearance of the accused, the requesting Party shall indicate in its request the coercive or security measures that may be applied under its laws and the requested Party may not exceed the said measures.

3. The Central Authority of the requested Party shall give advance notice of the date and place for receiving testimony or expert evidence.

4. If the person who is summoned or notified to appear, submit a report or provide documents in the requested Party invokes immunity, incapacity or privileges under the laws of the requesting Party, the latter shall be informed of the plea of the said person so that the appropriate measures may be taken.

5. The requested Party shall communicate to the requesting Party the date and place of compliance with the request for assistance.

6. The requested Party may, under conditions of reciprocity, authorize the participation of the authorities of the requesting Party in proceedings to be carried out in its territory. Such participation shall be permitted exclusively in the capacity of observer of the competent authority of the requested Party, in accordance with the applicable legislation of the said Party.

Article 8. Appearance of persons in the requesting Party

1. Any person summoned or notified to appear as a witness or expert in the territory of the requesting Party, in fulfilment of a request for assistance, shall be subject to the applicable national law of the requesting Party.

2. The requesting Party shall bear the cost of the witness or expert responding to the summons, in accordance with the provisions of its legislation. The requested Party may, at the request of the requesting Party, provide an advance payment. The person requested shall be informed of the type and amount of the expenses that the requesting Party has agreed to pay the person.

3. If the request is in the form of a summons for a defendant, witness or expert to appear in the requesting Party, failure to appear shall not result in the application by the requested Party of penalties or coercive measures that exceed those provided for in the laws of the requesting Party.

*Article 9. Transfer of persons in custody to give evidence
for purposes of identification*

1. A person held in custody in the requested Party and who is required to give evidence or for identification purposes in the requesting Party shall be transferred to the State of the requesting Party if the person so consents and if the Central Authority of the requested Party has no reasonable grounds for denying the request.

2. For the purposes of this Article:

(a) The requesting Party shall have the authority and obligation to keep in custody a person who has been so transferred unless otherwise authorized by the requested Party;

(b) The requesting Party shall return the person so transferred to the custody of the requested Party as soon as circumstances permit or as agreed between the competent Central Authorities.

Article 10. Guarantees

1. Where a request is for a person to be summoned to appear in the requesting Party, and where the person so summoned appears, he or she may not be subjected to coercive measures or restrictions on his or her personal freedom, on account of acts committed prior to the notification of the summons.

2. The guarantee provided for in paragraph 1 shall cease to have effect if the person remains for more than 15 (fifteen) days in the territory of the requesting Party beginning from the time that the person's presence is no longer explicitly required by the competent authorities of the requesting Party.

3. Where the witness or expert has agreed to cooperate with a request for assistance, the requesting Party to which he is transferred shall guarantee his physical safety.

Article 11. Cooperation in the preliminary inquiry

At the request of the requesting Party, the requested Party shall provide the necessary facilities for the presentation of documentary evidence and conduct of proceedings within its territory, under the terms of this Agreement.

Article 12. Transmittal of final rulings and judicial records

1. When transmitting a final ruling in a criminal case, the requested Party shall also provide any information related to the respective proceeding that may have been requested by the requesting Party.

2. Judicial records that are necessary for the conduct of a criminal proceeding shall be transmitted to the requesting Party as soon as possible.

Article 13. Time limits

In the case of all requests for assistance in which a time limit is set for compliance, the requesting Party shall transmit the request to the requested Party at least 30 (thirty) days prior to the expiration of the time limit. In urgent cases, the requested Party may waive the deadline for notification.

Article 14. Collection of evidence

1. The requested Party may, in accordance with its national laws and at the request of the requesting Party, receive evidence from persons in a proceeding instituted in the requesting Party and may request the presentation of needed evidence.

2. All questions must be submitted in writing and the requested Party shall decide on their lawfulness after reviewing them.

3. Both the officials of the requesting Party and the other persons involved in the proceeding may be present during the questioning, which shall always be conducted in conformity with the laws of the requested Party.

Article 15. Location and identification of persons

The requested Party shall take the necessary measures to locate and identify any person described in a request for assistance and shall keep the requesting Party informed of the progress and results of its investigations.

Article 16. Collection and impoundment of objects

1. All requests for the collection, impoundment and/or delivery of any object to the requesting Party shall be satisfied if they include information that justifies such action under the laws of the requested Party.

2. Officials of the requested Party who have custody of impounded objects shall certify the chain of custody, the identity of the object and the integrity of its condition. The certification shall be authenticated by the Central Authority. No other certification or authentication shall be required. Certificates shall be admissible in the requesting Party as evidence of the veracity of the statements contained therein.

3. The requested Party shall not be obliged to deliver to the requesting Party any impounded object, unless the requesting Party agrees to fulfil the conditions set by the requested Party in order to protect the interests of any third parties in the object to be delivered.

Article 17. Assistance in confiscation and other proceedings

1. Where either Party is made aware of the existence of the means to commit a crime and of the proceeds of the crime in the territory of the other Party, which may be confiscated, seized or secured in some other way in accordance with the legislation of the other Par-

ty, it shall communicate this fact to the Central Authority of the other Party. The said other Party shall transmit such information to its authorities in order to determine whether any measures should be taken. The said authorities shall make their decision in accordance with the legislation of their country and, through the intermediary of their Central Authority, shall inform the other Party of the action that has been taken.

2. The Parties shall provide judicial assistance to the extent permitted by their respective laws and this Agreement in proceedings related to the confiscation of the instrumentalities used in the commission of crimes and the proceeds therefrom, restitution to the victims of crimes, and payment of the fines imposed as penalties in criminal proceedings.

3. The requested Party and the requesting Party shall divide in the proportion and under such conditions as may be agreed, as the case may be, the items that have been confiscated or the proceeds from their sale, provided that there is effective collaboration between the Parties.

Article 18. Information on sentencing

Each Party shall inform the other Party annually about the sentences imposed by its own judicial authorities on citizens of the other Party.

Title III. Proceedings and expenditures

Article 19. Proceedings

1. Assistance shall be provided at the request of the requesting Party.
2. The request shall be presented in writing and shall contain the following information:
 - (a) Position and name of the competent authority responsible for the investigation, proceeding or action referred to in the request;
 - (b) Grounds for, nature of and subject to which the investigation, proceeding or action refers;
 - (c) Description of the evidence or information required or of the acts of judicial assistance requested;
 - (d) Description of the acts that constitute the crime in respect of which assistance is being sought, in conformity with the legislation of the requesting Party. The text of the applicable legislation shall be copied or attached;
 - (e) Details of and grounds for any aspect or special proceeding that the requesting Party may wish to be instituted; and
 - (f) Deadline by which the requesting Party would like its request to be fulfilled.
3. Depending on the nature of the judicial assistance requested and to the extent possible, the request shall include:
 - (a) Available information on the identity, characteristics and particulars that would permit the person to be identified and his residence located;

(b) The identity, characteristics and particulars that would permit the identification of the person to be summoned or notified, the relationship of that person to the criminal proceeding and the manner in which the notification should be given;

(c) The identity, characteristics and personal particulars that permit the persons being sought in connection with the preliminary inquiry to be identified;

(d) The description of the place of search or inspection and of the objects to be impounded;

(e) Mention of the type of property in respect of which impoundment, confiscation, seizure and/or attachment is requested and its relationship to the person against whom a judicial proceeding has been or is about to be instituted;

(f) Where necessary, specification of the amount allocated to the precautionary measure;

(g) The special arrangements and modalities that may be required for the execution of the measures and the information that will permit the authorities or individuals who may participate to be identified; and

(h) Any other information that may be necessary in accordance with the legislation of the requested Party to permit the fulfilment of the request.

If the requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional information from the requesting Party.

Article 20. Expenses

The requesting Party shall meet all costs arising from the fulfilment of a request, except for the travel of witnesses and honorariums of experts, which shall be met by the requesting Party.

Article 21. Confidentiality

Any proceeding or evidence provided pursuant to this Agreement shall be kept in strict confidence, except where such information is required in investigations that are part of a criminal proceeding described in the request for assistance, or where the Requesting Party and the Requested Party agree otherwise.

Title IV. Final provisions

Article 22. Consultations and other modalities

The Central Authorities shall hold consultations on agreed dates for the purpose of evaluating the assistance provided pursuant to this Agreement.

The assistance and proceedings provided for in this Agreement shall not prevent any of the Parties from assisting the other Party in conformity with the provisions of other international agreements to which they may be parties or of their national laws.

Article 23. Interpretation

Any dispute arising in connection with the interpretation or application of this Agreement shall be settled between the Central Authorities and, in the event of failure to reach an agreement, consultations shall take place between the Parties.

Article 24. Ratification, amendment and entry into force

1. This Agreement shall remain in force indefinitely and shall enter into force 30 (thirty) days after the Parties have notified each other, through the diplomatic channel, that their respective legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended by mutual agreement between the Parties and the agreed amendments shall enter into force in accordance with the procedure set out in paragraph 1.

3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing through the diplomatic channel. The Agreement shall cease to be in force six (6) months after the receipt of such notice by the other Party.

4. A request for judicial assistance presented while this Agreement is in force shall be met even if the Agreement has been denounced.

Signed at Mexico City on 2 May 2000, in duplicate originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the United Mexican States:

ROSARIO GREEN
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Peru:

FERNANDO DE TRAZEGNIES
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Les États-Unis du Mexique et la République du Pérou, ci-après dénommés les " Parties " ;

Désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'assistance judiciaire en matière pénale ;

Reconnaissant que la lutte contre la délinquance appelle la communauté internationale à agir de concert ;

Considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent ;

Respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États, ainsi que les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention ;

Conscientes de la nécessité d'engager des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes en coordonnant des mesures de rationalisation des mécanismes classiques d'assistance judiciaire ;

Sont convenus de ce qui suit :

Titre I. Dispositions générales

Article premier. Obligation d'assistance

1. Chacune des Parties s'engage à fournir à l'autre Partie, en application des dispositions du présent Accord, l'assistance judiciaire la plus complète dans les procédures judiciaires.

2. Cette assistance judiciaire concerne la prévention, l'instruction et la poursuite des délits ou toute autre procédure pénale découlant d'actes qui relèvent de la compétence ou de la juridiction de la Partie requérante au moment de la demande d'assistance et concernant une procédure connexe, de quelque autre type que ce soit, liée aux actes criminels.

3. Le présent Accord n'habilite pas les autorités d'une Partie à exercer, sur le territoire relevant de la juridiction de l'autre Partie, les fonctions ou l'autorité exclusivement conférées aux instances de cette autre Partie par sa législation nationale.

4. L'assistance judiciaire comprend :

a) L'exécution d'enquêtes préliminaires, lorsque la demande en est faite et la communication de ses résultats ;

b) La transmission de documents et de renseignements conformément aux dispositions du présent Accord ;

c) La notification des décisions de procédure, des ordres et des décisions finales du tribunal ;

d) La localisation et le transfert volontaire de témoins et d'experts aux fins du présent Accord ;

e) La mise à exécution des évaluations des experts, des décisions de confiscation, de saisie, de mise en fourrière, de gel d'actifs et d'embargo et d'identification ou de détection de produits d'activités criminelles ou d'instruments utilisés pour commettre des actes criminels, des inspections visuelles et des fouilles ou surveillances de domiciles ;

f) La facilitation de l'entrée sur le territoire de la Partie requise et l'octroi de la liberté de mouvement sur ce territoire aux responsables de la Partie requérante, en qualité d'observateurs, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes de la Partie requise, aux fins de contribuer à l'exécution des actes décrits dans le présent Accord, à condition que la législation nationale de la Partie requise le permette ; et

g) Toute autre forme d'assistance dont les Parties peuvent convenir, conformément à l'objet et au but du présent Accord.

Article 2. Circonstances dans lesquelles l'assistance peut être demandée

1. L'assistance est accordée même si les faits ayant motivé la procédure dans la Partie requérante ne constituent pas une infraction aux lois de la Partie requise.

2. Toutefois, s'agissant de l'exécution d'une commission rogatoire pour des inspections, des perquisitions, des confiscations, des mises de biens sous séquestre, des saisies conservatoires, des interceptions de communications téléphoniques aux termes d'un mandat ainsi que pour l'exécution de mesures faisant appel à toute forme de contrainte, l'assistance n'est accordée que si les faits qui en motivent la requête sont aussi considérés comme une infraction aux lois de la Partie requise, ou lorsque la personne visée consent par écrit à l'exécution des mesures requises.

Article 3. Refus d'assistance

1. La demande d'assistance peut être refusée si :

a) Les mesures demandées sont interdites par la législation de la Partie requise ou sont contraires aux principes fondamentaux du système juridique de ladite Partie ;

b) Le fait au titre duquel la procédure a été instituée est considéré par la Partie requise comme étant un délit politique ou militaire ;

c) La Partie requise a de bonnes raisons de conclure que des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité, de langue, d'opinions politiques ou de statut personnel ou social de la personne accusée du délit pourraient avoir une incidence négative sur le déroulement ou l'issue de la procédure ;

d) La personne contre laquelle l'instance a été introduite dans la Partie requérante a déjà été poursuivie pour le même acte que celui au titre duquel la demande d'assistance est présentée ;

e) La Partie requise estime que la fourniture de l'assistance pourrait avoir de graves conséquences néfastes sur sa souveraineté, sa sécurité ou ses autres intérêts nationaux vitaux ; et

- f) La demande ne remplit pas les conditions requises aux termes du présent Accord.
2. Une demande d'assistance peut être refusée ou la réponse peut être reportée si l'exécution des mesures requises interfère avec une instance judiciaire engagée dans la Partie requise.
3. La Partie requise peut, avant de refuser ou de reporter la réponse à une demande d'assistance, envisager de soumettre la demande à certaines conditions, qui seront déterminées par l'administration centrale. Dans tous les cas, les raisons du refus ou du report seront indiquées.

Article 4. Exécution

1. Les demandes d'assistance au titre du présent Accord sont présentées par l'intermédiaire des autorités centrales compétentes, qui sont : dans le cas des États-Unis du Mexique, le Bureau du Procureur général de la République et, dans le cas de la République du Pérou, le Bureau du ministère public et les autorités judiciaires.
L'autorité centrale de la Partie requise traite rapidement les demandes et, le cas échéant, les transmet à d'autres autorités compétentes.
2. Les dispositions de la législation de la Partie requise s'appliquent à l'exécution des mesures requises.
3. La Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu de l'exécution des mesures demandées.

Titre II. Formes spéciales d'assistance

Article 5. Signification et transmission de documents

1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise prend des mesures concernant toute assignation, signification ou transmission de documents en rapport avec une demande d'assistance, ou faisant partie de ladite demande, conformément à sa législation nationale.
2. Une demande de signification d'une procédure doit être dûment justifiée et présentée dans un délai raisonnable avant la date de comparution prévue.
3. La Partie requise fournit les éléments de preuve de l'exécution de l'action conformément à la demande d'assistance.

Article 6. Transmission de documents, de renseignements et d'objets

1. Lorsque la demande d'assistance a trait à la transmission d'avis ou de documents, la Partie requise peut fournir des copies certifiées conformes, sauf lorsque la Partie requérante demande spécifiquement des documents originaux, auquel cas, la Partie requise détermine dans quelle mesure il est possible de procéder ainsi et informe la Partie requérante en conséquence.

2. Les documents originaux, les avis et objets transmis à la Partie requérante sont rendus le plus tôt possible à la Partie requise, à moins que la Partie requise ne renonce expressément à ce droit.

3. La Partie requise peut fournir les dossiers ou renseignements détenus par une entité officielle qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et les mêmes conditions qu'elle les mettrait à la disposition de ses propres autorités chargées de l'application de la loi.

4. Les autorités compétentes certifient et authentifient les éléments de preuve ou les documents transmis par l'intermédiaire des autorités centrales conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 7. Comparution de personnes dans la Partie requise

1. Si la fourniture de l'assistance judiciaire demandée nécessite la comparution de personnes pour fournir des éléments de preuve ou des renseignements documentaires ou des objets dans le cadre de l'action engagée par le Bureau du Ministère public et des autorités judiciaires sur le territoire de la Partie requise, ladite Partie peut, si sa législation nationale le permet, appliquer et faire respecter les moyens de coercition prévus par sa propre législation.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, concernant la comparution de la personne accusée, la Partie requérante indique dans sa demande les mesures de coercition ou de sécurité applicables aux termes de sa législation et la Partie requise ne dépasse pas lesdites mesures.

3. L'autorité centrale de la Partie requise notifie à l'avance la date et le lieu de réception de la déposition ou du témoignage d'expert.

4. Si la personne qui est sommée ou notifiée de comparaître, de présenter un rapport ou de fournir des documents dans la Partie requise invoque l'immunité, l'incapacité ou des privilèges aux termes de la législation de la Partie requérante, celle-ci est informée de la requête de ladite personne afin que les mesures appropriées puissent être prises.

5. La Partie requise communique à la Partie requérante les date et lieu de la satisfaction de la demande d'assistance.

6. La Partie requise peut, à charge de réciprocité, autoriser la participation des autorités de la Partie requérante à la procédure à engager sur son territoire. Lesdites autorités sont autorisées à participer exclusivement à titre d'observateurs de l'autorité compétente de la Partie requise, conformément à la législation applicable de ladite Partie.

Article 8. Comparution de personnes dans la Partie requérante

1. Toute personne sommée de comparaître ou à qui il est notifié qu'elle doit comparaître en tant que témoin ou expert sur le territoire de la Partie requérante, suite à une demande d'assistance, est soumise à la législation applicable de la Partie requérante.

2. La Partie requérante prend à sa charge les frais du témoin ou de l'expert qui répond à la sommation, conformément aux dispositions de sa législation. La Partie requise peut, à

la demande de la Partie requérante, effectuer un paiement anticipé. La personne sommée est informée du type et du montant des frais que la Partie requérante a accepté de verser à ladite personne.

3. Si la demande revêt la forme d'une sommation d'un prévenu, d'un témoin ou d'un expert à comparaître dans la Partie requérante, la non-comparution n'entraîne pas l'application par la Partie requise de pénalités ou de mesures de coercition qui dépassent celles que prévoit la législation de la Partie requérante.

Article 9. Transfert de personnes détenues pour donner des éléments de preuve ou aux fins d'identification

1. Une personne détenue dans la Partie requise et qui est demandée dans la Partie requérante pour donner des éléments de preuve ou à des fins d'identification est transférée dans l'État de la Partie requérante si la personne y consent et si l'autorité centrale de la Partie requise n'a pas de motifs raisonnables de refuser la requête.

2. Aux fins du présent article :

a) La Partie requérante a le pouvoir et l'obligation de garder en détention une personne qui a été ainsi transférée à moins que la Partie requise n'en convienne autrement.

b) La Partie requérante renvoie la personne transférée à la garde de la Partie requise dès que les circonstances le permettent ou selon qu'il sera convenu par les autorités centrales.

Article 10. Garanties

1. Lorsque la demande concerne la sommation d'une personne à comparaître dans la Partie requérante, et lorsque la personne ainsi sommée comparait, elle ne peut être soumise à des mesures de coercition ou de restriction sur sa liberté personnelle, en raison d'actes commis avant la notification de la sommation.

2. La garantie prévue au paragraphe 1 cesse d'avoir effet si la personne demeure plus de 15 (quinze) jours sur le territoire de la Partie requérante à compter de la date à laquelle la présence de la personne n'est plus explicitement requise par les autorités compétentes de la Partie requérante.

3. Lorsque le témoin ou l'expert a accepté de coopérer avec une demande d'assistance, la Partie requérante à laquelle il est transféré garantit sa sécurité physique.

Article 11. Coopération dans le cadre de l'enquête préliminaire

À la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les facilités nécessaires à la présentation de preuves documentaires et à la conduite de la procédure sur son territoire, conformément au présent Accord.

Article 12. Transmission des décisions définitives et des dossiers judiciaires

1. En transmettant une décision définitive dans une affaire pénale, la Partie requise fournit également tout renseignement relatif à la procédure que pourrait avoir demandé la Partie requérante.
2. Les dossiers judiciaires nécessaires à la conduite d'une instance pénale sont transmis à la Partie requérante le plus tôt possible.

Article 13. Délais d'exécution

Dans le cas de toutes les demandes d'assistance pour lesquelles un délai d'exécution est fixé, la Partie requérante transmet la demande à la Partie requise au moins 30 (trente) jours avant l'expiration du délai d'exécution. Dans les cas d'urgence, la Partie requise peut déroger à la date limite de notification.

Article 14. Obtention des éléments de preuve

1. La Partie requise peut, conformément à sa législation nationale et à la demande de la Partie requérante, recevoir des éléments de preuve de personnes dans le cadre d'une procédure engagée dans la Partie requérante et peut demander la présentation des éléments de preuve nécessaires.
2. Toutes les questions doivent être posées par écrit et la Partie requise détermine leur bien-fondé juridique après les avoir étudiées.
3. Les autorités compétentes de la Partie requérante et les autres personnes concernées par la procédure peuvent assister à l'interrogatoire, qui est toujours mené conformément à la législation de la Partie requise.

Article 15. Localisation et identification de personnes

La Partie requise prend les mesures nécessaires pour localiser et identifier toute personne décrite dans une demande d'assistance et tient la Partie requérante informée des progrès et des résultats de ses recherches.

Article 16. Saisie et retenue d'objets

1. Toutes les demandes de saisie, retenue et/ou remise de tout objet à la Partie requérante sont satisfaites si elles comprennent les renseignements qui justifient une telle action aux termes de la législation de la Partie requise.
2. Les autorités de la Partie requise qui ont la garde des objets retenus attestent de la chaîne de possession, de l'identité de l'objet et de l'intégrité de sa condition. L'attestation est certifiée par l'autorité centrale. Aucune autre attestation ou certification n'est requise. Les attestations sont admissibles dans la Partie requérante comme éléments de preuve de la véracité des déclarations qui y sont contenues.

3. La Partie requise n'est pas tenue de livrer à la Partie requérante un objet retenu si la Partie requérante ne remplit pas les conditions fixées par la Partie requise pour protéger les intérêts de tiers dans l'objet à livrer.

Article 17. Assistance en matière de confiscation et d'autres procédures

1. Lorsque l'une ou l'autre Partie est informée de l'existence de moyens de commettre une infraction et du produit de l'infraction sur le territoire de l'autre Partie, qui peuvent être confisqués, saisis ou mis en sûreté de toute autre manière conformément à la législation de cette autre Partie, elle communique ce fait à l'autorité centrale de l'autre Partie. Ladite autre Partie communique ces renseignements à ses autorités afin de déterminer si des mesures doivent être prises. Lesdites autorités prennent leur décision conformément à la législation de leur pays et, par l'intermédiaire de leur autorité centrale, informent l'autre Partie de la mesure qui a été prise.

2. Les Parties accordent l'assistance judiciaire, dans la mesure permise par leurs législations respectives et le présent Accord, dans les procédures liées à la confiscation des instruments ayant servi à commettre des délits et de leur produit, la restitution aux victimes des délits et le paiement d'amendes imposées à titre de pénalité dans les poursuites pénales.

3. La Partie requise et la Partie requérante se partagent dans les proportions et dans les conditions convenues, le cas échéant, les objets qui ont été confisqués ou le produit de leur vente, à condition qu'il y ait une collaboration effective entre les Parties.

Article 18. Renseignements concernant les peines imposées

Chaque Partie informe chaque année l'autre Partie des peines prononcées par ses autorités judiciaires à l'encontre des citoyens de l'autre Partie.

Titre III. Poursuites judiciaires et dépenses

Article 19. Poursuites judiciaires

1. L'assistance est fournie à la demande de la Partie requérante.
2. La demande est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :
 - a) Position et nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête, des poursuites ou de l'action visée par la demande ;
 - b) Justification, nature et objet de l'enquête, des poursuites ou de l'acte ;
 - c) Description des éléments de preuve ou des renseignements requis ou des actes d'assistance judiciaire demandés ;
 - d) Description des actes qui constituent le délit au titre duquel l'assistance est demandée, conformément à la législation de la Partie requérante. Le texte de la législation applicable doit être repris ou annexé ;
 - e) Les détails et les raisons de tout aspect ou de la procédure spéciale que la Partie requérante peut souhaiter engager ; et

f) La date limite à laquelle la Partie requérante aimerait que sa demande soit satisfaite.

3. En fonction de la nature de l'assistance judiciaire demandée et dans la mesure du possible, la demande comprend :

a) L'information disponible sur l'identité, les caractéristiques et les détails qui permettraient d'identifier la personne et de situer son lieu de résidence ;

b) L'identité, les caractéristiques et les détails qui permettraient d'identifier la personne à sommer ou à notifier, les rapports entre cette personne et la procédure pénale et la manière dont la notification doit être donnée ;

c) L'identité, les caractéristiques et les renseignements personnels qui permettent d'identifier les personnes recherchées dans le cadre de l'enquête préliminaire ;

d) La description du lieu de la recherche ou de l'inspection et des objets à retenir ;

e) La mention du type de bien pour lequel la retenue, la confiscation, la mise sous séquestre et/ou la saisie sont demandées et la relation avec la personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée ou est sur le point d'être engagée ;

f) Le cas échéant, la précision du montant affecté à la mesure de précaution ;

g) Les dispositions et les modalités spéciales pouvant être requises pour l'exécution des mesures et les renseignements qui permettront de déterminer les autorités ou les personnes susceptibles de participer ; et

h) Toute autre information pouvant être requise, conformément à la législation de la Partie requise, pour permettre de satisfaire la demande.

Si la Partie requise juge que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants en vue de traiter celle-ci, elle peut demander des renseignements complémentaires à la Partie requérante.

Article 20. Frais

La Partie requise prend à sa charge tous les frais exposés dans le cadre de l'exécution d'une demande, à l'exception des frais afférents au voyage des témoins et des honoraires des experts qui sont à la charge de la Partie requérante.

Article 21. Protection du caractère confidentiel

Tout acte de procédure ou élément de preuve communiqué conformément au présent Accord est gardé strictement confidentiel, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux enquêtes faisant partie d'une procédure pénale décrite dans la demande d'assistance, ou si la Partie requérante et la Partie requise en conviennent autrement.

Titre IV. Dispositions financières

Article 22. Consultations et autres modalités

Les autorités centrales tiennent des consultations aux dates convenues aux fins d'évaluer l'assistance fournie conformément au présent Accord.

L'assistance et la procédure prévues par le présent Accord n'empêchent aucune des Parties d'aider l'autre Partie conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquelles elles pourraient être parties ou de leurs législations nationales.

Article 23. Interprétation

Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé entre les autorités centrales et, si elles ne parviennent pas à un accord, des consultations ont lieu entre les Parties.

Article 24. Ratification, modifications et entrée en vigueur

1. Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur et entrera en vigueur 30 (trente) jours après que les Parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord entre les Parties et les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe 1.

3. L'une ou l'autre des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par écrit, par la voie diplomatique. L'Accord cessera d'être en vigueur six (six) mois après la réception du préavis de cette dénonciation par l'autre Partie.

4. Une demande d'assistance judiciaire présentée alors que le présent Accord est en vigueur sera satisfaite même si l'Accord a été dénoncé.

Signé à Mexico le 2 mai 2000, en double exemplaire, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour les États-Unis du Mexique :

ROSARIO GREEN

Ministre des affaires étrangères

Pour la République du Pérou :

FERNANDO DE TRAZEGNIES

Ministre des affaires étrangères